

Rasgos de un urbanismo no violento

Rosario del Caz Enjuto. Universidad de Valladolid

La ciudad siempre ha tratado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a las agresiones enemigas. Para ello, durante siglos, se ciñó de muros inexpugnables que iban modernizándose al compás de la evolución y mejora de las armas y sistemas de ataque. El amurallamiento fue la práctica habitual de defensa de las ciudades mientras éstas cumplieron el papel que posteriormente se asignaría a los Estados. Cuando éstos finalmente se crean (y el Estado se identifica con la nación, y no con las ciudades), las murallas urbanas dejan de tener sentido y se abaten sistemáticamente. Posteriormente, la aparición de los tanques, de la aviación y de todo tipo de armas sofisticadas e “inteligentes”, o de los contundentes y aparentemente simples ataques terroristas recientes, han cercenado definitivamente la garantía de la seguridad frente a la guerra en las ciudades.

Asumido, pues, que las ciudades, que el urbanismo (pero parece que tampoco otras decisiones de rango estatal), nada pueden hacer frente a la guerra externa, las preocupaciones de los gobiernos municipales y de los ciudadanos de clase media y media-alta frente a la seguridad se centran en un posible enemigo que no ataca desde afuera, sino que está dentro del mismo espacio urbano, que vive al lado. Se trata de aquellas personas pertenecientes a grupos marginales, hoy en día cada vez más asociados a grupos de inmigrantes de diversos países, grupos que de manera lenta, pero imparable van cambiando la composición social de las urbes. Frente a una creciente sensación de miedo (propiciada en buena medida por los discursos oficiales) a un enemigo de otra cultura, de otra raza, pero sobre todo, pobre, van generalizándose en las ciudades una serie de prácticas urbanas que, frente a lo que en principio pudiera parecer, no hacen sino agravar a largo plazo los problemas.

En efecto, hoy las ciudades (algunos ámbitos de ellas) vuelven a fortificarse para separar a unos ciudadanos de otros. Proliferan en muchas ciudades, y van extendiéndose a casi todas, los barrios cerrados (las *gated communities*), espacios gestionados de forma privada, vigilados por compañías también privadas, a los que está restringido el acceso. Pero en estas ciudades cada vez más duales, junto a estos barrios exclusivos también se consiente la existencia de guetos de infravivienda, barrios subequipados, espacios de acogida (poca) de aquella población que molesta, espacios convenientemente separados de las comunidades de clase media. Y, por supuesto, las ciudades actuales ven instalarse (casi siempre en áreas obsoletas) grandes espacios destinados al comercio y al ocio, también gestionados por empresas privadas, que son bien acogidos por los ayuntamientos ante las expectativas de regeneración y mejora de la imagen urbana. Se trata, por supuesto, de “recintos seguros”, donde está reservado el derecho de admisión.

Desde luego, el de las *gated communities* es un fenómeno muy extendido en las ciudades americanas (del Norte y del Sur), pero también en Sudáfrica, en Alemania o en Japón, y que va prendiendo con celeridad en España. Aunque seguramente uno de los casos más ilustrativos de la división del espacio urbano en ámbitos “protegidos” y ámbitos “ocupados” sea el de la ciudad de Los Ángeles. Mike Davis hizo un recorrido por la ciudad de Los Ángeles poniendo de manifiesto la existencia de suburbios residenciales vigilados por patrullas de guardias privados, al lado de un centro de la ciudad poblado de guetos y bandas callejeras; y el centro de la ciudad, ocupado por los negocios y protegido por cientos de cámaras, que ante cualquier indicio negativo dan la señal de alerta y hacen que se despliegue un sistema de seguridad que blindará el distrito.

Y si este tipo de barrios va en aumento, mucho más podemos decir de otros lugares igualmente discriminatorios: los grandes centros comerciales asociados a potentes ofertas de ocio y esparcimiento, los sofisticados parques tecnológicos, los centros de negocios en los centros de las ciudades, etc., todos ellos dotados de aparatos de alta tecnología de detección y de vigilancia y de servicios y mecanismos de seguridad que controlan a las personas y pueden expulsar a aquellas que resulten molestas.

Todos estas pautas urbanas no hacen sino quebrar la idea de ciudad integradora y con ello de poner las bases de una peligrosa inestabilidad social, dado que el aguante de los excluidos tarde o temprano tocará fondo. La creciente desigualdad social en un mundo de ciudades abocadas a acoger cada vez más población pobre (se quiera admitir o no, se pongan barreras, se apliquen leyes de inmigración, o limiten cupos de entrada, el fenómeno de la inmigración es imparable) provocará, de no actuar con equidad y justicia, una importante erosión social.

Los rasgos para un urbanismo no violento pasan por mezclar e integrar, por reequilibrar constantemente todos los ámbitos de la ciudad, por no permitir la existencia de barrios ricos amurallados, mientras al otro lado se instalan barriadas sin los más elementales servicios urbanos. En definitiva: por dar continuidad al espacio urbano. Pasan también por exaltar y cuidar el espacio urbano (aquel en el que

nadie puede pedir cuentas sobre la presencia de nadie), por hacerlo accesible a todos, acogedor, representativo de todos aquellos valores cívicos propios del espíritu de la ciudad. Frente a la proliferación de espacios privados en los que si no puedes consumir no puedes entrar, las autoridades municipales han de responder incrementando la oferta de lugares públicos, gratuitos y de calidad.